



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	Daniel Josué Bedoya Gallego
DEMANDADO	Ingelel S.A.
RADICADO	05-001-31-05- 018-2017-00131
TEMA	Acreencias laborales y sanción moratoria
DECISIÓN	Revoca y confirma sentencia

El doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2021), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **046** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **DANIEL JOSUÉ BEDOYA GALLEGO** contra la sociedad **INGELEL S.A.S**, con radicado **05-001-31-05-018-2017-00131**.

• **PRETENSIONES:**

El demandante pretende se condene a la demandada a pagar la cesantía, intereses a la cesantía, vacaciones, primas de servicios, sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y costas procesales.

• **HECHOS:**

Como fundamento de sus pretensiones, afirmó que laboró al servicio de la demandada desde el 12 de junio de 2014 al 30 de enero de 2015 fecha en la cual renunció. Que se desempeñó en el cargo de auxiliar de logística de maquinaria, devengando como salario la suma de \$700.000.

- **CONTESTACIÓN:**

Fue emplazada la demandada, nombrándosele curador, el cual contestó extemporáneamente a la demanda.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 25 de septiembre de 2019, el Juzgado Decimoctavo Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** que, entre el demandante y la sociedad accionada en reestructuración, existió un contrato laboral a término indefinido, el cual tuvo como extremo inicial el 12 de junio de 2014 y final 30 de enero de 2015, con un salario de \$700.000.

DECLARÓ PARCIALMENTE PROBADA y de oficio la excepción de pago, toda vez que la accionada canceló al demandante la suma de \$426.744, por concepto de cesantía.

CONDENÓ a la accionada a pagar al demandante la suma de \$402.929, por el saldo insoluto de las prestaciones sociales y vacaciones definitivas, argumentando que la deuda en favor del actor era de \$829.673, como se observa con el comprobante de liquidación de contrato.

ABSOLVIÓ de las demás pretensiones, como lo es la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que la sociedad no actuó en el ámbito de la mala fe, pues para el momento en que finalizó el vínculo con la demandada, ésta se encontraba en una situación que la llevó a solicitar la aprobación de la liquidación por parte de los acreedores.

Y, **CONDENÓ** en costas a cargo de la demanda.

- **APELACIÓN:**

✓ DEMANDANTE:

La anterior decisión fue recurrida por la parte demandante, quien, en síntesis, manifestó que no está de acuerdo con la excepción de pago parcial, toda vez que no se le puede dar validez al documento aportado por el promotor del proceso de reestructuración de la sociedad Ingelel S.A.S en reestructuración, ya que es un registro de pago que proviene de un tercero y que no se encuentra acreditado que tal suma haya sido cancelada en la cuenta del demandante ni algún recibo de pago donde se observe que recibió dicho valor. Y que no genera buena fe por parte de la accionada que esta haya cancelado un supuesto pago parcial, el cual fue anexado por una tercera persona, y además que los procesos de reorganización no son indicativos de buena fe para absolver de la moratoria.

✓ DEMANDADO:

Expuso en su apelación que todo debe estar sometido al trámite de reestructuración, por lo que esta no es la instancia para reclamar las prestaciones sociales.

• **ALEGATOS:**

✓ DEMANDANTE:

Una vez transcurrido el término para efectuar los alegatos de conclusión, la parte actora manifestó que no existió el pago parcial de la obligación, toda vez que no se le debe dar validez probatoria al documento aportado por el liquidador de la sociedad demandada, sociedad que no se hizo parte en el proceso, a pesar de tener conocimiento del mismo. Y que procede la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que la entidad accionada actuó de mala fe, al no comparecer al proceso y no siendo válido escudarse en la reestructuración de la entidad.

• **DECRETO 806 DE 2020:**

Atendiendo a lo establecido en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “*Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y*

flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

CONSIDERACIONES:

No es tema de debate la relación laboral sostenida entre las partes, la cual quedó plenamente acreditada con el certificado de folios 4 y 6 del expediente, en donde se comprueba que el actor laboraba para la entidad accionada del 12 de junio de 2014 al 30 de enero de 2015, desempeñando el cargo de Auxiliar Logístico en Máquinas y Equipos, devengando un salario de \$700.000.

Los **problemas jurídicos** se delimitan exclusivamente en analizar: **i)** si se puede declarar pago parcial de las prestaciones sociales; **ii)** si procede o no la sanción moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; Y **iii)** si lo solicitado debe estar sometido al trámite de reestructuración.

i) En lo que respecta al **pago parcial**, debe decirse que en las pruebas obrantes en el expediente, milita la liquidación de prestaciones sociales de folio 5, en la que se indica que la demandada debía cancelar al actor por la finalización del contrato la suma de \$829.673, y en la que se observa que la cuenta bancaria de ahorros del demandante es la N° 29690496791 del Bancolombia.

Ahora, debe señalarse que si bien la juez de primera instancia, manifestó que el señor promotor JAIRO VILLA RESTREPO no estaba legitimado para actuar en el proceso, lo hizo con el fin de señalar que no podía darle terminación al proceso, toda vez que no ostentaba la calidad de representante legal de la sociedad accionada, no obstante, si les dio pleno valor a los documentos anexados por éste.

Pues bien, con los documentos de folio 52 y 53 del expediente, esto es los certificados de egresos de transferencia de nómina de la empresa INGELEL S.A.S, del 28 de febrero de 2015 y el abonado en Bancolombia, se comprueba

que se le consignó al demandante la suma de \$426.744, en la cuenta N° 29690496791, la cual figura a nombre del actor como aparece en el comprobante de liquidación de contrato.

Por lo anterior, como correctamente lo manifestó la juez de primera instancia, si existió un pago parcial de la obligación, y por tal razón, se **CONFIRMARÁ** la sentencia de primera instancia en tal sentido.

ii) Sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

En cuanto a la pretensión por el no pago de los salarios y prestaciones, consagrada en el **ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO**, modificado por el artículo 29 de la ley 789 de 2002, ha advertido la jurisprudencia que esta sanción no puede aplicarse de forma automática e inexorable, ya que el juez debe determinar si el no pago de los salarios y prestaciones sociales a la finalización del contrato obedeció a buena o mala fe del empleador.

En caso objeto de estudio, en el transcurso del proceso, la parte demandada nunca desplegó un actuar diligente ni invocó motivo alguno frente a la imposibilidad de cancelar tardíamente la liquidación del contrato de trabajo por valor de \$829.673, pago que se desconoce si está incluidos dentro del rubro de acreedores laborales de la sociedad demandada, debido a que ésta se sometió al proceso de reestructuración consagrado en la Ley 550 de 1999.

Si bien, con la prueba documental anexada al plenario se observa que la accionada estaba atravesando por una situación económica difícil, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia advierte que cuando el empleador, aún sin incurrir en culpa, pero por situaciones propias del mercado, se ve inmerso en una crisis financiera que afecta la estabilidad propia de la empresa y por ello deja reiteradamente de pagar el salario a sus trabajadores, es evidente que viola gravemente sus obligaciones como tal, pues la dinámica en que desarrolla su actividad empresarial posibilita que todos los fenómenos, salvo fuerza mayor o caso fortuito, sean previsibles y por tanto no pueden usarse como justificantes para incumplir sus obligaciones como empleador, pues el salario es la contraprestación directa y necesaria de la fuerza de trabajo que el trabajador pone a disposición de su empleador, con la que aquel

puede satisfacer sus necesidades personales y familiares, es decir que puede realizarse como ser humano y proyectar su vida dentro del núcleo social en el cual se desenvuelve. Estas consideraciones jurídicas constituyen una síntesis de la sentencia 35125 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, proferida el 31 de marzo de 2009.

De igual forma, en sentencia con radicado 37288 del 24 de enero de 2012, la alta Corte en mención, indicó que el proceso de reactivación económica no puede legitimar indefinidamente al empleador para omitir el pago de las acreencias laborales.

En este orden de ideas, al no existir razón justificable para el no pago de su liquidación al momento de terminación del contrato, el Tribunal considera que el actuar de la demandada, no encaja en la buena fe, por lo que procederá la indemnización económica del artículo 65 del Código del Trabajo, equivalente a un día de salario por día de retardo por los primeros 24 meses, contados desde la fecha de terminación del contrato, y después se cancelarán intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes 25 hasta cuando el pago se verifique.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el demandante devengaba un salario mensual de \$700.000 como se acreditó con los certificados de folio 4 a 6, lo que equivale a un salario diario de \$23.333 al momento de la finalización de su contrato de trabajo, y multiplicada esta suma por 720 días, que equivale a 24 meses, se **CONDENARÁ** a INGELEL S.A.S. a reconocer y pagar al señor DANIEL JOSUÉ BEDOYA GALLEGO la suma de **\$16'800.000**, por concepto de la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del Código del Trabajo, y a partir de la iniciación del mes 25 se cancelará intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, hasta cuando se verifique el pago, sobre la suma de \$402.929. Por tal razón, esta Sala **REVOCARÁ** la sentencia de la primera instancia, para en su lugar, **CONDENAR** a la sanción moratoria del artículo 65 del Código del Trabajo.

iii) Terminación del proceso por estar la accionada en reestructuración.

No es de recibo para la Sala lo expuesto por el curador de la parte accionada, pues lo que se discute en el caso de autos, es la existencia de un pago de acreencias laborales y su sanción moratoria, que a todas luces, conforme a la prueba aportada al expediente como son el Acta de Asamblea General de Acreedores del 8 de abril de 2016, Convenio de Normalización de la deuda acordada entre INGELEL S.A.S EN REESTRUCTURACIÓN con sus acreedores, los Votos Aprobatorios suscritos por los representantes de los acreedores presentes en la asamblea, se desconoce si en realidad las acreencias del actor hacen parte del acuerdo de restructuración con los acreedores , toda vez que no existe prueba en el plenario que de fe si dichas deudas constituyen un crédito laboral, por consiguiente, no es viable declarar la terminación del proceso

En las condiciones anteriores y sin necesidad de más consideraciones al respecto, se **REVOCARÁ** y **CONFIRMARÁ** la sentencia de primera instancia revisada por vía de apelación.

Costas de la primera instancia como lo dijo la juez. En esta no se causaron.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

PRIMERO: Se **REVOCA** la sentencia que se revisa por vía de consulta, y en su lugar se **CONDENA** a **INGELEL S.A.S.** a reconocer y pagar al señor **DANIEL JOSUÉ BEDOYA GALLEG0** la suma de **\$16'800.000** por concepto de la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, teniendo en cuenta que a partir de la iniciación del mes 25 se cancelará intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a hasta cuando el


pago se verifique, sobre la suma de \$402.929. En lo demás se **CONFIRMA** la sentencia.

SEGUNDO: En lo demás se **CONFIRMA** la sentencia.

TERCERO: Costas procesales como se dejó dicho en la parte motiva de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 045 del 15 de marzo de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>